

EL DESARROLLO HUMANO LOCAL SOSTENIBLE
FRENTE A LA CRISIS ACTUAL

*Francisco Alburquerque **

La crisis económica actual

El análisis de la crisis financiera y económica actual está fuertemente relacionado con el creciente grado de primacía que han ido adquiriendo los movimientos financieros en la dinámica económica, facilitados por el contexto e ideología desreguladores que se fueron imponiendo a nivel internacional desde la década de los ochenta con el triunfo de las políticas neoliberales. La magnitud de los movimientos financieros internacionales no guarda ninguna relación razonable con los movimientos de la producción o el comercio, es decir, lo que suele llamarse “economía real”. Según cifras oficiales, el volumen de las transacciones financieras es hoy día de dos mil billones de dólares mientras que el Producto Interior Bruto mundial es sólo de 44 billones de dólares. En otras palabras, la magnitud de las operaciones financieras es más de 40 veces la economía real. Con ello puede apreciarse la existencia de una lógica especulativa predominante, la cual introduce de forma permanente elementos de incertidumbre y dificultades de funcionamiento en la economía real.

Este creciente predominio de la lógica financiero-especulativa en la economía tiene lugar en un contexto de cambio y reestructuración debidos a la existencia de un nuevo paradigma tecnoeconómico basado en el mayor valor agregado de conocimiento, lo que implica adaptaciones relevantes en las formas de producción y gestión, mejora del capital humano y despliegue de procesos de cooperación empresarial, coordinación interinstitucional y gobernanza público-privada. Frente a la magnitud de dichos cambios, las opciones especulativas del capital financiero suponen una resistencia a entrar en los procesos de innovación productiva optando por aplicaciones financieras lucrativas de corto plazo, lo cual ha sido alentado desde la ideología neoliberal instalada en nuestros gobiernos a lo largo de estas últimas décadas, con relativa independencia del signo político partidario, debido a la fuerte influencia de la versión neoclásica de la llamada “ciencia económica”, la única que se enseña en nuestras universidades.

Las medidas monetarias, fiscales y liberalizadoras introducidas desde los años ochenta del siglo pasado por la administración de Ronald Reagan tuvieron como finalidad la revalorización del dólar estadounidense y la atracción de capitales extranjeros a fin de hacer frente al enorme déficit de su balanza de pagos, en gran parte debido a los impresionantes gastos en armamento y la política de rearme nuclear. A partir de ese momento, tomando como argumento principal el control de la inflación, se establecieron programas de ajuste monetario y liberalización económica y financiera,

* Francisco Alburquerque es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, España y miembro de la [Red de Investigadores en Desarrollo Económico Territorial y Empleo](#) del [Programa Iberoamericano de Ciencia y Teconologia para el Desarrollo](#) (CYTED).

procediendo a independizar el banco central de cualquier control público, al tiempo que se procedía a la desregulación de los movimientos de capitales. De esa forma, los movimientos financieros experimentaron un enorme crecimiento, facilitado por las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Como es bien conocido, el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Mundial y el resto de organizaciones multilaterales con base en Washington DC, suscribieron el llamado “Consenso de Washington” como instrumento fundamental en el establecimiento y difusión de una ortodoxia fundamentalista neoliberal según la cual había que proceder a la apertura externa de las economías, la liberalización y desregulación de los movimientos de capitales, el desmantelamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas, tratando de controlar el gasto público. Todo ello provocó, a partir de los años ochenta, duros ajustes monetarios, destrucción del tejido productivo empresarial y agravamiento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Junto a ello, se mitificó el concepto de globalización y la exportación de mercancías como medio de alcanzar el desarrollo, un aspecto que he tratado de cuestionar desde hace tiempo (Alburquerque, 1996), al dejar de lado la gran mayoría de la producción mundial, la cual tiene lugar en escenarios locales y no en un mitificado “mercado mundial”. Igualmente, es necesario recordar la enorme hipocresía en la que se ha venido desarrollando la realidad (con fuertes componentes de proteccionismo llevado a cabo por las grandes potencias) y las propuestas retóricas de los principales gobiernos de los países de mayor grado de desarrollo en favor del liberalismo comercial. Hay que revisar sin más demora esta esquizofrenia entre el fundamentalismo librecambista y la realidad del proteccionismo, a fin de asegurar sobre todo, la articulación agroindustrial y de servicios que permita sustentar una base económica interna capaz de atender las necesidades básicas de la gente en los respectivos ámbitos territoriales en todos los países el mundo para lograr un desarrollo más humano.

A lo largo de estos años, han sido varios los episodios de crisis financieras, entre los cuales cabe recordar la crisis de la deuda externa iniciada en 1982, el derrumbe de la Bolsa de Tokio y la crisis bancaria y del sector inmobiliario de Japón en 1990, la crisis mexicana (“efecto Tequila”) de 1994, la “crisis asiática” del segundo semestre de 1997, la crisis del “corralito” argentino del 2000, la explosión de la burbuja de Internet en 2001, a lo que hay que sumar la crisis inmobiliaria, bancaria y bursátil que estalló en Estados Unidos en 2007 y que se ha generalizado a escala mundial durante 2008.

En efecto, el discurso ortodoxo legitima un funcionamiento financiero que conlleva la pérdida de los referentes que debería asumir la dinámica económica, esto es, garantizar el desarrollo sostenible ambientalmente y extender el bienestar social de la gente en cada país y territorio. La persistente insistencia en las ventajas de la liberalización de capitales financieros no puede evitar que al cabo de décadas de supremacía financiera se constate fehacientemente que su expansión se ha hecho a costa de retrasar la incorporación de innovaciones productivas y de ampliar la fractura entre los grupos sociales de la población.

En el modo de gestión del capitalismo financiero, el capital productivo ve, por tanto, reducidos sus márgenes de maniobra y debe atenerse a los imperativos de las variables

monetarias y financieras. A ello colabora la enorme simplificación *macroeconómica* en la que suelen razonar los responsables económicos y financieros, que impide una mirada más amplia hacia las diferentes dimensiones del desarrollo económico y la competitividad empresarial y territorial, como son el nivel *microeconómico* (para la adecuada identificación de las innovaciones requeridas en la gestión empresarial y tecnológica desde cada ámbito sectorial y territorial), el nivel *mesoeconómico* (para alentar la necesaria coordinación institucional entre las diferentes administraciones públicas territoriales), y el nivel *metaeconómico*, a fin de alentar la cultura emprendedora local y la cooperación público-privada en ese esfuerzo innovador (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996).

Prevalece así un sesgo monetarista de las políticas económicas y se confiere a los bancos centrales un incalculable poder económico y político al convertirlos en los garantes de la continuidad de las políticas ortodoxas, fuertemente simplificadoras de la realidad socioeconómica. De este modo, la actividad de las empresas y la generación del empleo quedan sometidos a una lógica de corto plazo, mediatizada por las variaciones de los tipos de interés y de las tasas de cambio, en un contexto de incertidumbre que es antagónico con el horizonte de medio y largo plazo que requieren las decisiones sobre inversión e innovación del capital productivo y el desarrollo económico y social.

Sin embargo, pese a dicha evidencia, sigue estando presente en multitud de dirigentes y responsables políticos (así como en una gran parte de la población) un pensamiento favorable a la libertad de los mercados, insistiendo en las ventajas de la rebaja de impuestos y la limitación de la intervención del Estado, lo que es precisamente el tipo de funcionamiento que nos trajo hasta esta nueva crisis del capitalismo especulativo. Parece como si existiera una dificultad importante en el aprendizaje de la historia, posiblemente debido a la eficacia de los medios de persuasión de masas cuando estos son estratégicamente controlados por los poderes fácticos del conservadurismo, desviando las reflexiones sustantivas hacia la telebasura organizada, haciendo de la gente una masa desinformada y maleable.

Como señala Stiglitz (2000), para responder a la Gran Depresión, los gobiernos no sólo asumieron un papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de actividad económica, sino que también aprobaron medidas legislativas destinadas a paliar muchos de los problemas, como el subsidio del desempleo, la Seguridad Social, los fondos de garantía de depósitos, los programas de apoyo a los precios agrícolas y muchos otros dirigidos a diversos objetivos sociales y económicos, entre ellos, la mejora de las condiciones laborales y la regulación de la bolsa de valores. Este conjunto de programas constituye lo que en Estados Unidos se conoció con el nombre de *New Deal*.

Una explicación más profunda de la crisis

La crisis actual tiene una explicación bastante más profunda que la de un desajuste financiero en el modelo de crecimiento insostenible actualmente predominante. Como señala Vicenç Navarro (2008), una explicación exclusivamente bancaria de la crisis financiera actual resulta insuficiente para su plena comprensión, ya que la crisis está relacionada, en último término, con la escasez de demanda por parte de la población, una situación que precede a esta crisis y que contribuye a la falta de resolución de la misma.

En efecto, las políticas públicas llevadas a cabo durante los últimos treinta años (que incluyeron la desregulación de los mercados laborales y la reducción de los salarios y de la protección social) han provocado una enorme polarización de las rentas a nivel mundial. En Estados Unidos el salario promedio de una persona de 30 años es un 12% más bajo hoy que hace treinta años, pese a tener mayor nivel de educación y haberse dado un alza de la productividad del 68% en ese periodo. Este descenso de los salarios se ha compensado parcialmente con el aumento del número de integrantes de las familias que trabajan (entre ellas el incremento de la presencia de la mujer en el mercado de trabajo) y mediante el alargamiento de la jornada, siendo Estados Unidos uno de los países donde los empleados trabajan un mayor número de horas al año (350 horas más al año que el promedio de la Unión Europea). Esta situación explica la presencia de un elevado nivel de endeudamiento de las familias en Estados Unidos a fin de mantener el nivel de vida, solicitando préstamos a los bancos y agencias de crédito a los que podían acceder utilizando sus viviendas como avales.

Paralelamente hay que hacer notar el incremento espectacular de los beneficios empresariales desde los años ochenta, año en el que el 1% del grupo de rentas más altas en Estados Unidos tenía el 8% de la renta total del país, porcentaje que subió hasta el 20% en el año 2007. La enorme acumulación de riqueza en manos de los más ricos, muy por encima de sus necesidades de consumo, estimuló poderosamente la búsqueda de mayores ganancias de dinero en actividades especulativas.

El descenso de la demanda o consumo interno es, pues, un problema mayor para el cual las medidas de regulación bancaria no son suficientes. Se requiere una política decidida de respaldo a la economía y la sociedad real basada en valores de sostenibilidad y de equidad laboral y social desde los diferentes territorios, un tema que supera ampliamente la declaración de intenciones de las cumbres del G-20 ante la crisis actual. En estas cumbres no ha existido aún ninguna referencia al *enfoque territorial del desarrollo*, que -en mi opinión-, podría ayudar a concretar propuestas con los diferentes actores desde sus propios ámbitos locales.

Dada la naturaleza de la crisis y el hecho de que la primacía del capital financiero sobre el capital productivo constituye un rasgo principal del modo de gestión actual del capitalismo financiero, lo menos que puede decirse es que no estamos ante una crisis pasajera sino, probablemente, todo lo contrario.

Es obvio que la política monetaria es un instrumento esencial de la política económica general para conducir la actividad económica. Pero, en manos de los bancos centrales, se limita al control de la inflación, dejando de lado los requerimientos del desarrollo económico sostenible y el empleo. Finalmente, los bancos centrales limitan la capacidad de maniobra de los gobiernos para orientar el rumbo de la economía por un modelo de desarrollo menos dependiente de la especulación financiera y centrado en la atención de las necesidades de los agentes de la economía real (Torres, 2007).

Asimismo, como indica Joan Prats (2008), no estamos ante una crisis del capitalismo sino de uno de sus posibles modos de gestión y de su correspondiente ideología: el neoliberalismo. En efecto, el neoliberalismo constituye un conjunto de ideas y políticas basadas en la creencia -no demostrada históricamente-, de que los mercados se corrigen a sí mismos, asignan los recursos con eficiencia y sirven al interés público. Este fundamentalismo del libre mercado estuvo detrás de la política económica de Ronald

Reagan y de Margaret Thatcher desde los años ochenta, así como en el citado “Consenso de Washington”, alentando la privatización, la liberalización y el establecimiento de bancos centrales independientes de la regulación o controles públicos y preocupados exclusivamente por la inflación.

No resulta difícil aventurar el impacto posible de la crisis sobre la experiencia e iniciativas de desarrollo humano local sostenible. Desde luego, el movimiento de concentración financiera que acompaña la evolución de la crisis actual supone una dificultad en la captación de recursos financieros para los proyectos de desarrollo territorial, los cuales precisan del involucramiento de las entidades financieras presentes en el territorio en las estrategias de desarrollo económico local. Definitivamente, la tendencia de concentración del capital financiero no ayuda nada en este sentido, sobre todo si se reflexiona que todas las “buenas prácticas” en desarrollo económico territorial suelen disponer de entidades financieras comprometidas con los procesos de desarrollo local.

Por otra parte, la crisis financiera coincide también con otros problemas importantes a nivel mundial como son los relativos a la energía, el cambio climático y la crisis alimentaria, que afectan de forma especial a la parte de la humanidad más necesitada. En este sentido, las estrategias de desarrollo deben incrementar sus esfuerzos por incorporar actuaciones dirigidas a fomentar la producción ecológica, la utilización eficiente de los recursos naturales (en especial del agua y la energía), el uso de energías renovables y la gestión de los residuos, incluyendo el reciclaje y reutilización de los mismos, avanzando con todo ello en una apuesta por el desarrollo humano local sostenible.

Un enfoque de desarrollo humano local sostenible ante la crisis actual

Como muestran los análisis de prospectiva más elementales, el escenario futuro estará muy posiblemente compuesto por cambios importantes como son –de un lado- los efectos económicos del cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles (que es causa del sistemático aumento de los precios de las materias primas) y -de otro lado-, la expansión de las energías renovables y la implantación extensiva de la sociedad del conocimiento. Estos son los elementos que marcarán el futuro económico a medio y largo plazo, junto con los cambios demográficos y migratorios (Mulas-Granados, 2008).

Por ello, resulta preciso que los bancos centrales se sometan al control público y de las instituciones democráticas representativas, garantizando que la política monetaria se comprometa con los objetivos del desarrollo económico local sostenible (en los planos económico, socio-institucional y ambiental), lo que supone el fomento de la creación de oportunidades productivas compatibles con el respeto por el medioambiente local, la generación de empleo de calidad, la equidad y el bienestar social. Esto supone abandonar la mitificación del funcionamiento del libre mercado y la liberalización irrestricta de los movimientos de capitales, estableciendo mecanismos de regulación que aseguren su vinculación con las inversiones en capital productivo y eviten las operaciones especulativas.¹

¹ En esta línea podrían contemplarse algunos instrumentos a nivel macro, como los citados por el Transnacional Institute (2008): a) Establecimiento de impuestos sobre los movimientos de capital financiero internacional, tal como propone la tasa Tobin; b) Cierre de los paraísos fiscales y control de las diversas formas de evasión fiscal practicadas por grandes empresas y personas acaudaladas; c) Sustitución del Fondo Monetario Internacional, que ha contribuido de forma decisiva a la crisis financiera

Igualmente, debería existir una intervención pública decidida para asegurar líneas de crédito apropiadas y suficientes para el desarrollo de las microempresas y Pymes, así como para el despliegue de estrategias de desarrollo territorial, como forma de alentar una actuación desde las propias bases desde las que opera la economía y la sociedad real.

En el mismo sentido, la vivienda debe dejar de ser objeto de especulación, y constituir un derecho de las personas. Para ello, resulta necesario eliminar las leyes y normas que prolongan la especulación a través de la recalificación del suelo, otorgando ganancias desorbitadas a propietarios de terrenos e intermediarios que no añaden ningún valor al proceso productivo con tales recalificaciones. Separar de ese modo el componente especulativo de la actividad orientada por el capital productivo en este sector sólo puede deparar sensatez y garantía de calidad de vida para la población.

Del mismo modo, la incorporación de innovaciones sostenibles en este sector podría ayudar a eliminar su pernicioso impacto sobre el medioambiente, tratando de incorporar el urbanismo y arquitectura sostenibles, así como el uso eficiente del agua, la energía y los materiales utilizados. Es evidente que avanzar en el proceso de descentralización, asegurando recursos financieros suficientes a los Ayuntamientos, constituye un aspecto decisivo en este sentido, a fin de frenar las irresistibles tentaciones de recurrir a la corrupción inmobiliaria como forma de atender a las crecientes demandas existentes por parte de la ciudadanía en sus territorios.

Es evidente que nada de esto surgirá como alternativa si no existe una organización ciudadana de actores sociales decididos a resistir la inercia con la que los actores beneficiados de la crisis tratarán de comportarse para solamente maquillar la situación actual. Nos va demasiado en ello para delegar nuestras vidas y la de nuestros hijos e hijas en manos de un sistema regido por la lógica de los especuladores.

La crisis actual ha removido, por tanto, las finanzas internacionales con incidencia muy adversa para el crédito a las empresas (en especial las microempresas y pequeñas y medianas empresas)² y el consumo de los hogares, incidiendo con ello en el incremento del desempleo y la reducción de ingresos, todo lo cual convierte la crisis también en un tema social.

Lo grave es, como señala Sami Naïr (2009), que los desconcertados responsables políticos parecen gobernar a ojo en casi todas partes, superados por la rapidez, profundidad y complejidad de la crisis pero, sobre todo, porque en gran medida, son aún prisioneros de los esquemas ideológicos dominantes, de conceptos que se han vuelto

actual, sustituyéndolo por un mecanismo financiero regulador democrático a nivel internacional, y no sólo controlado por el gobierno de los Estados Unidos; d) Establecimiento de límites al riesgo de cualquier nuevo producto o instrumento financiero; e) Suspensión de las negociaciones sobre servicios financieros dentro de la Ronda de Doha para la liberalización comercial en el seno de la Organización Mundial del Comercio; f) Información pública de todos los agentes de cabildeo (lobby) ante las autoridades normativas de regulación nacional e internacional; g) Eliminación de los contratos de blindaje e indemnizaciones extraordinarias de los altos cargos de las instituciones financieras y supresión de los incentivos a comportamientos basados en actividades especulativas; h) Participación de instituciones globales (no solamente los organismos financieros internacionales) en los debates sobre la nueva arquitectura financiera mundial;

² La reducción del crédito afecta al capital productivo, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas que suponen en España el 99,87% del total de empresas formales existentes, explicando el 89% del empleo formal y el 63% del producto interior bruto (Pastor, 2008).

inoperantes, y de los reflejos de autojustificación de la propia responsabilidad en la crisis.

La crisis supone en efecto, una profunda puesta en duda de los conceptos del liberalismo anglosajón aún hegemónico en el mundo y un replanteamiento radical en el cual el enfoque del desarrollo económico territorial para el empleo debe ocupar un papel predominante. Este enfoque se aleja del nivel excesivamente agregado y abstracto de la visión convencional de la macroeconomía, y se basa –igualmente- en la movilización y participación de los diferentes actores locales, públicos y privados, desde cada ámbito territorial en los diferentes países del mundo.

Supone, además un planteamiento distante de los enfoques asistenciales, dependientes de los subsidios, los cuales son utilizados recurrentemente como medio para asegurar el clientelismo político y electoral. Y es, sobre todo, un enfoque para la acción, concertado entre los distintos actores, con una visión integrada del desarrollo, que incorpore las distintas dimensiones del mismo, esto es el desarrollo humano, el desarrollo sociopolítico e institucional, el desarrollo económico local y el desarrollo sustentable ambientalmente.

El desarrollo local no es sólo desarrollo de recursos endógenos, sino capacidad local para aprovechar las oportunidades de dinamismo existentes, tanto endógenas como exógenas. Y, al mismo tiempo, si bien es un enfoque ascendente (desde abajo), también son muy importantes las actuaciones y políticas de carácter descendente (desde arriba), es decir, las que son responsabilidad de los diferentes Estados centrales y de los organismos de la cooperación internacional para el desarrollo. De ahí la relevancia de la coordinación entre los diferentes niveles de las administraciones públicas (local, regional o provincial, estatal, nacional y supranacional), así como la formación en el enfoque del desarrollo humano local sostenible entre los dirigentes y responsables políticos y sociales tanto a nivel local como provincial, regional y central.

La política del desarrollo debe incorporar, por tanto, una aproximación territorial y no solamente una visión sectorial o agregada. Debe incluir la participación de los actores locales en la elaboración de las respectivas estrategias territoriales de desarrollo. Debe incorporar una atención fundamental a las innovaciones del capital productivo en el tejido empresarial, tanto las de carácter tecnológico como de gestión y socio-institucionales, dando una prioridad fundamental a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de producción y consumo, tanto de carácter formal como informal, a fin de incorporar los objetivos de la cohesión social en la política de desarrollo empresarial y empleo.

Para ello hay que incrementar también el conocimiento de los sistemas productivos locales superando los viejos sistemas de información estadística sectorial que poco ayudan en este sentido. Y todo ello, promoviendo desde el inicio, la construcción del “capital social” necesario desde cada territorio. Frente al enfoque convencional del desarrollo, que lo reduce habitualmente a mero crecimiento económico cuantitativo, es necesario un enfoque territorial que de importancia a la gente y los territorios donde habita, que se oriente hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y que incorpore para ello una política activa de empleo en condiciones de trabajo digno (o trabajo decente, como señala el lema de la OIT), que combine la necesidad de los territorios de ser competitivos con la evidencia de mantener sus sostenibilidad social y

medio ambiental (o la competitividad sostenible humana, como sugiere el ILS-LEDA), a fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de todas las personas.

Frente a la convicción en la difusión del crecimiento económico desde las regiones centrales que postula el capitalismo global, el enfoque del desarrollo territorial apuesta por estrategias concertadas entre los actores locales, basadas fundamentalmente en el mejor aprovechamiento de los recursos territoriales y las oportunidades de dinamismo externo. Y frente al acompañamiento de las políticas asistenciales y declaraciones retóricas para enfrentar las situaciones de pobreza y degradación social y medioambiental en el mundo (Declaración de los Objetivos del Milenio, por ejemplo), se postula el fortalecimiento de las capacidades y recursos de los gobiernos locales para asumir sus nuevas funciones en el desarrollo económico y el empleo local, la eficiente coordinación interinstitucional y la cooperación entre el sector público, el sector privado empresarial y el sector de conocimiento, entendiendo la gobernanza como una tarea compartida entre los diferentes actores locales en la gestión de todos estos procesos.

Referencias

- Albuquerque F. (1996) *Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico. (Una respuesta a las exigencias del ajuste estructural)*. Santiago de Chile: ILPES/CEPAL, LC/IP/R.174, diciembre
- El País (2008) 'Nuevas reglas en Wall Street', *El País Negocios*, 21 de septiembre
- Esser K, W. Hillebrand; D. Messner; J. Meyer-Stamer (1996) 'Competitividad sistémica: nuevos desafíos a las empresas y a la política', *Revista CEPAL*, n° 59
- Mulas-Granados C. (2008) 'España, más allá de la crisis económica', *El País. La Cuarta Página*, 29 de abril
- Naïr S. (2009) 'Las élites ante la crisis', *El País*, 7 de marzo
- Navarro V. (2008) 'De lo que no se habla en la crisis financiera', *Sistema Digital*, 3 de noviembre
- Pastor J. (2008) 'Responsabilidad social corporativa. Pymes. La unión hace la fuerza', *El País Extra*, 23 de noviembre
- Pérez C. (2004) *Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza*. México: Siglo XXI Editores, en: <http://www.carlotaperez.org/Articulos/TRFC-TOCsp.htm>
- Prats J. (2008) 'Más allá de la crisis financiera global. Crónicas del fin del neoliberalismo', *Revista Gobernanza*, n. 6, Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa: www.aigob.org
- Stiglitz J.E. (2000) *La economía del sector público*. Barcelona: Antoni Bosch
- Torres J. (2007) 'Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones', 10 de septiembre, en: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=55925>,
- Transnacional Institute (2008) 'Declaración con motivo de la Cumbre del G-20 sobre la crisis financiera', 17 de noviembre, en: <http://www.quiendebeaqui.org/spip.php?article1125>